

Miguel Angel Granados Chapa

Los dirigentes empresariales están satisfechos. Los de los trabajadores no. Los primeros se reunieron el martes 25, en Los Pinos, con el presidente De la Madrid. Habló en su nombre Jorge Chapa, reelegido cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, enriquecido ahora con la presencia del Consejo Nacional Agropecuario, cuyo dirigente toma asiento con los líderes de industriales, comerciantes y patronos en general, así como con los ex banqueros a quienes ahora había que llamar *banqueros paralelos*.

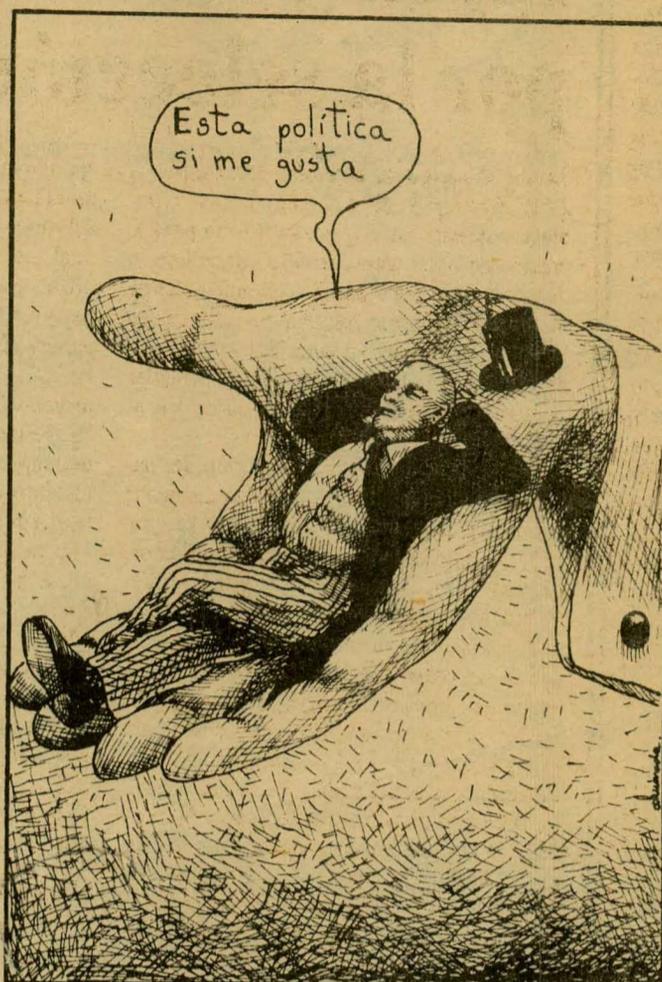
Los dirigentes empresariales mostraron su complacencia ante el gobierno. La devolución de su confianza no podía ser más explícita: "se han despejado las serias dudas y reservas sobre cuál sería el rumbo que seguiría la política nacional", dijo Chapa, ex presidente de línea dura de los comerciantes. Pidió, asimismo, que continúe la política de austeridad, aunque ello signifique, explicó, que se prolongue el sacrificio de los asalariados y los empresarios. Al incluir a estos últimos, acaso pensaba en las dificultades por las que atraviesa la Cervecería Moctezuma? Si así hubiera sido, seguramente no incluía a las otras empresas del grupo Bailleres. Según comparó Juan Antonio Zuñiga en su nota de ayer, El Palacio de Hierro e Industrias Peñoles, que con la Moctezuma y otra integraban el grupo dominado por la Banca Cremi, obtuvieron ganancias por 6 mil millones la primera y por 400 millones la segunda, sólo en el primer semestre del año.

La confianza empresarial se convirtió en un producto caro a raíz de la devaluación de agosto de 1976. Cuando cuatro meses después López Portillo inició su gobierno y se esmeró en conseguir la fe de los dirigentes empresariales, empezó a tejer una tela penelopiana. La trama se deshizo por completo el primero de septiembre de 1982, cuando se produjo la nacionalización bancaria, que los líderes empresariales entendieron como una traición, así de estrechos habían llegado a ser los vínculos suyos con el presidente. A partir de ese momento se volvieron ariscos ante el gobierno, a pesar de que el iniciado en diciembre de aquel año funesto para sus intereses dio repetidas muestras de buena voluntad hacia ellos y su sector. Tanto, que llegó a pagar costos políticos altos para recuperar su confianza sin obtenerla, cuando modificó la situación producto de la expropiación y puso en venta el 34 por ciento de las acciones bancarias para que las adquirieran los antiguos intermediarios financieros. Hasta la fecha ninguno de ellos compró un solo peso de esos títulos, pues habiéndose quemado con leche hasta a ese jocoque le soplan.

Su abstención tenía el propósito evidente de conseguir más y más. Y lo obtuvieron: se les indemnizó con cantidades cuyos guarismos producen mareos, y se les devolvieron las empresas que eran propiedad de los bancos. Especialmente se interesaron en las compañías financieras no bancarias. Y aunque se espera que la legislación pronta a ser sometida a los legisladores contenga normas que impidan la operación de la banca paralela, protagonizada por los antiguos barones del dinero, éstos aprovechan la actual situación para reconstituir sus feudos.

El que empecinadamente todavía preside, don Carlos Abedrop, estuvo presente en la reunión mañanera del martes 25. Su presencia

PLAZA DOMINICAL



MANO AMIGA ■ Ahumada

allí simbolizaba el aval que Chapa dio al gobierno en su encendido discurso, en que sentenció que "las corrientes estatificantes están pasando de moda". Tal vez lo dijo suponiendo que congratulaba con ello a su anfitrión, partidario de un Estado ágil, no obeso. Pero tal vez, también, se equivocó al hacer su diagnóstico. Porque pese a los favorecedores de que el gobierno mexicano se deshaga de empresas públicas, éstas imponen su realidad. El propio Presidente, una semana atrás, había salido en defensa del sector paraestatal de la economía, en una reunión de gabinete económico.

Le dio pretexto la emisión de un reportaje en esa especie de *Alarma* de la televisión que es *60 minutos*. El domingo 16, Juan Ruiz Healy, convertido unas semanas antes en vocero gubernamental para hablar (mal) de los refugiados guatemaltecos, se volvió contra sus contratantes para denostar a las empresas públicas. Con la obvia pero útil técnica de presentar medias verdades, mostró que el público en general, cuando no carece de opinión sobre las paraestatales o ignora con qué se come eso, era feroz adversario de la participación estatal en la economía. El Presidente pidió a su gabinete tomar posiciones sobre esa actitud, para defender a las empresas públicas. Eso hizo, en un desayuno con los reporteros que cubren la información de Conasupo, el miércoles 26, el director general de ese organismo, José Ernesto Costemalle, tan expuesto a los tiros de los partidarios de la abstención estatal que actúan dentro y fuera del gobierno. Lo hizo, hay que decirlo, hábil y persuasivamente.

También Manuel J. Clouthier estaba en el desayuno de la reconciliación empresarial con el gobierno. Tal vez no concuerda su opinión con la de Chapa, sucesor suyo en la presidencia del Consejo. Clouthier piensa no sólo que en el PRI hay

ladrones ("yo no hago ronda con rateros" le contestó al reportero de nuestro diario, Julio Hernández cuando éste le preguntó por qué no es miembro del partido gubernamental), sino que tampoco tiene buena opinión del gobierno en general. El jueves pasado estuvo en Monterrey a decir una conferencia sobre mercadotencia en el Tecnológico (así lo reporta el *Diario de Monterrey* el 28 de septiembre) y allí dijo que "la actividad política nacional ha ido quedando en manos de los más ineptos y de los más deshonestos". Clouthier razonó que, en consecuencia "ya es tiempo que los buenos empiecen a hacer cosas buenas y no nada más ponerse el monte de buenos".

Para ser congruente con sus palabras, se ha propuesto hacer política partidaria. A diferencia de su paisano Emilio Goicoechea, que también quiere dar ese paso, pero espera a que un partido le ofrezca una candidatura, Clouthier ha solicitado su ingreso al PAN, a quien ya ayudó en las últimas elecciones municipales en Sinaloa. Aunque un panista viejo como Gerardo Medina ha expresado reticencias a la admisión del en más de un sentido prominente líder empresarial, y la dirección nacional panista se muestra poco entusiasmada para admitirlo, parece que la *realpolitik*, practicada también en el panismo le evitará al Barón tener que llamar a otras puertas, que no podrían ser más que la del PDM... aunque quizá el PARM pudiera dar alas a sus aspiraciones mesiánicas, pues todo puede esperarse de uno y de otro, en tal sentido.

Si los empresarios están satisfechos, los líderes de los trabajadores no. Es verdad que el gobierno en general, y el Presidente en particular, reiteran sus declaraciones de fe en el movimiento obrero y en la alianza de éste con el régimen. Es verdad también que un segmento

muy combativo del gobierno (los jefes de la SPP: Carlos Salinas, en Morelia, ayer, y Manuel Camacho en Toluca, anteayer) buscaron matizar las condiciones del apoyo empresarial. Pero es obvio que en la práctica las relaciones gubernamentales con el sector trabajador no pasan por su mejor momento.

La decisión golpadora gana terreno. No se limita a dar palos a un sindicato como el de los nucleares por su militancia política (pese a la racionalidad de sus planteamientos sobre Uramex, avalados ahora hasta en documentos oficiales), sino que también alcanza, con ferocidad semejante, a inequívocos aliados del gobierno, como los telefonistas. Mañana debiera tomar posesión el comité elegido en marzo pasado, en que una vez más aparece a la cabeza Francisco Hernández Juárez.

Uno puede pensar lo que quiera de la reelección de los líderes obreros, pero lo cierto es que la mayor parte de los trabajadores de Teléfonos resolvió, por una parte, estipular legalmente que Hernández Juárez pudiera ser candidato nuevamente, y después elegirlo para un nuevo periodo al frente del gremio que encabeza desde fines de abril de 1976. La decisión de los electores, sin embargo, parece marchar en sentido contrario de la de funcionarios que en el sector político y en el sector laboral y en el de comunicaciones han resuelto que ya es hora de que Hernández Juárez se marche de la dirección sindical. No han escatimado esfuerzos para conseguir su propósito. No sólo requisaron la empresa sin ningún fundamento jurídico para impedir una huelga planteada en términos legales en busca de un legítimo incremento salarial. No sólo se propusieron descabezar al sindicato despidiendo a los delegados. No sólo auspiciaron la formación de una imagen pública contraria a los trabajadores, culpándolos de suspender el servicio con paros locos o de demorarlo con tortuguismo. No sólo eso: también se busca dar fuerza a una oposición interna que hasta ahora no ha sido capaz de derrotar en las urnas al comité de Hernández Juárez y quiere derribarlo litigando en los tribunales laborales.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se mostró especialmente ágil para ventilar la causa de los disidentes telefonistas. Pero no se piense mal. Ya el presidente de la junta, Mauro Gómez Peralta explicó que si el asunto se tramitó en pocas horas, después de haber estado dormido meses enteros, ello se debe a que la actividad general del organismo ha mejorado, e hizo posible abatir el rezago. Por eso, seguramente, se habilitaron para cursar la queja de la Planilla Negra días y horas que no son útiles. El resultado es que, con la requisa encima, y en visperas de que mañana, primero de octubre, tome posesión el comité ejecutivo, sus miembros deben pasar el fin de semana ante la Junta, que probablemente determine al menos aplazar dicho acto.

Su decisión legal, sin embargo, será contradicha por la resolución política de Hernández Juárez, que anunció su nueva asunción del mando ante el Congreso del Trabajo, el cobijo en que se resguarda. Eso pondrá a esa cúpula obrera en un predicamento grave, pues deberá decidir un apoyo eficaz a los telefonistas, o mostrar una vez más sus limitaciones, que llegan sólo a la dureza verbal pero no pueden pasar de allí.